

Del conflicto al cogobierno hídrico campesino en Misicuni y el Multipropósito (1940-2025)*

From conflict to peasant water co-governance in Misicuni and the Multipurpose Project (1940-2025)

Víctor Hugo Perales Miranda
Instituto de Investigaciones Sociológicas “Mauricio Lefebvre”,
Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia
E-mail: victorhugo76@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5249-1188>

Fecha de recepción: 2 de febrero de 2026

Fecha de aceptación: 3 de abril de 2026

* Declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés que haya influido en la elaboración del artículo.

La investigación de la cual se deriva este artículo contó con el apoyo del estudiante Marcelo Jurado Chávez, auxiliar de investigación extracurricular, y la investigadora adscrita, ingeniera Marcela Yawar Reynaga Bernabé.

Resumen: Se analiza la transformación de la agencia política campesina frente a la gobernanza territorial y los megaproyectos hidráulicos en Bolivia, estableciendo una comparación crítica entre el Proyecto Misicuni (Cochabamba) y el Programa Multipropósito (La Paz). Mediante una perspectiva que integra la sociología histórica y la ecología política, se rastrea el tránsito de las comunidades desde una resistencia pasiva frente al despojo –propia del sistema de haciendas– hasta la consolidación de mecanismos de cogobierno hídrico. La metodología se basó en un diseño cualitativo que trianguló el análisis documental histórico (1940-2025) con trabajo de campo. La investigación revela que el empoderamiento campesino ha ido de una movilización reactiva a la capacidad de politizar el ciclo hidrológico mediante el control físico y burocrático de nodos técnicos críticos. Se concluye que el neo-extractivismo urbano del Estado Plurinacional ha generado un escenario de gobernanza híbrida e interdependencia forzosa.

Palabras clave: Megaproyectos hidráulicos, ecología política, agencia política, cogobierno hídrico, metabolismo social, Bolivia.

Abstract: This article analyzes the transformation of peasant political agency regarding territorial governance and hydraulic megaprojects in Bolivia, establishing a comparison between the Misicuni Project (Cochabamba) and the Multipurpose Program (La Paz). Through a perspective that integrates historical sociology and political ecology, the transit of communities is traced from passive resistance against dispossession –characteristic of the hacienda system– to the consolidation of mechanisms of water co-governance. The methodology relied on a qualitative design triangulating historical documentary analysis (1940-2025) with fieldwork. The research reveals that peasant empowerment has evolved from reactive mobilization to the capacity to politicize the hydrological cycle through physical and bureaucratic control of critical technical nodes. It concludes that the urban neo-extractivism of the Plurinational State has generated a scenario of hybrid governance and forced interdependence.

Keywords: Hydraulic megaprojects, political ecology, political agency, water co-governance, social metabolism, Bolivia.

INTRODUCCIÓN

La historia agraria e hidráulica de Bolivia durante el siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI constituye un escenario privilegiado para analizar las complejas dinámicas de poder que estructuran la relación entre el Estado, los centros urbanos y las comunidades rurales. Históricamente, la provisión de agua y la gestión de las cuencas en el país han estado atravesadas por un profundo metabolismo social extractivo, donde las políticas de modernización se erigieron sobre la marginación de las poblaciones indígenas y campesinas que habitan las zonas de captación hídrica. En este contexto, los megaproyectos hidráulicos —tales como represas y trasvases a gran escala— han operado como verdaderos artefactos sociopolíticos capaces de redefinir las fronteras territoriales, la gobernanza local y la misma identidad regional. Hasta mediados del siglo XX, las lógicas de exclusión territorial operaron con fuerza tanto en las áreas rurales altoandinas como en la región de los valles. En la provincia Los Andes, el Estado funcionaba fundamentalmente como un aparato jurídico y represivo destinado a proteger los intereses de la élite terrateniente (Iriarte, 1980).

Un ejemplo paradigmático fue el dominio ejercido por figuras como Rosa Isabel Agramonte en Alto Peñas, bajo un régimen donde el habitante indígena era reducido a la condición de siervo mediante la institución del pongueaje (Poma Caba, 2020). Esta asimetría se cristalizó en normativas como el Decreto Supremo del 4 de julio de 1942, mediante el cual el Estado declaró Parque Nacional al grupo andino del Tuni Condoriri. Bajo el pretexto de proteger la fauna y fomentar el turismo, se entregó el control territorial a la Patrulla Andina del Club Andino Boliviano, invisibilizando por completo a los ayllus y comunidades originarias que gestionaban históricamente dicho ecosistema. Paralelamente, en la región de los valles, la conceptualización del extractivismo hídrico comenzó a tomar forma bajo un discurso de desarrollo tecnocrático. La idea de aprovechar las aguas del río Misicuni nació en 1944 como una iniciativa impulsada por círculos de ingeniería y élites urbanas para reequilibrar el metabolismo hídrico a favor de la ciudad capital. Como advierte Hines (2016, 2018, 2024), esta fase temprana del megaproyecto se caracterizó por subsumir el problema del agua en términos exclusivamente técnicos, invisibilizando a las comunidades campesinas de altura situadas en las zonas de captación. Las sucesivas

evaluaciones de firmas extranjeras durante las décadas de 1950 y 1970 legitimaron la viabilidad de la obra ante el Estado, postergando cualquier debate sobre sus impactos socio-territoriales de fondo. A partir de estos antecedentes, la problemática central que aborda este artículo radica en la evolución dialéctica de la capacidad de acción de estas poblaciones subalternizadas. Si bien durante décadas las comunidades fueron consideradas meras espectadoras de la imposición de una geografía de impactos asimétricos, la evidencia histórica demuestra que el campesinado boliviano gestó un profundo proceso de empoderamiento político.

En virtud de lo anterior, este artículo tiene como objetivo principal reflexionar críticamente sobre la línea de tiempo de la construcción de la agencia política de las comunidades rurales sujetas a la implementación de megaproyectos hidráulicos. Es resultado de la investigación “Megaproyectos hidráulicos en Bolivia: un análisis desde la sociología ambiental y el metabolismo social”, realizada en el marco de las investigaciones extracurriculares del Instituto de Investigaciones Sociológicas “Mauricio Lefebvre” IDIS durante la gestión 2025. Se parte del argumento de que esta agencia no es una característica estática, sino que ha sido construida en confrontación directa con las lógicas del Estado tecnocrático.

En los acápites de hallazgos, se sostiene que las comunidades han transitado desde una resistencia reactiva frente al despojo latifundista hacia lo que puede conceptualizarse como una soberanía de la infraestructura. Mediante el análisis comparativo del Proyecto Múltiple Misicuni en Cochabamba y los sistemas hidráulicos de la provincia Los Andes en La Paz, este trabajo reflexiona sobre la metamorfosis del poder comunal. A través de este análisis, se busca aportar al debate de la teoría sociopolítica sobre los límites del neoextractivismo estatal en contextos de plurinacionalidad, revelando cómo las poblaciones marginadas han logrado subvertir la direccionalidad del desarrollo modernizador para lograr imponer sus propias condiciones de reproducción material y cultural.

ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO

El sustento teórico de esta investigación se articula en torno a tres ejes fundamentales de la ecología política y la teoría sociopolítica latinoamericana: en primer lugar, se utiliza el concepto de metabolismo social del agua,

entendido como el proceso histórico mediante el cual las sociedades apropián, transforman y distribuyen la naturaleza para su reproducción (Linton y Budds, 2014). Para responder a la dinámica de los megaproyectos en este artículo, el metabolismo no se emplea como una simple metáfora, sino que se operacionaliza analíticamente en tres momentos materiales sucesivos: a) la entrada o captación, que históricamente implicó la apropiación y el despojo ecológico de las cuencas rurales de altura; b) la transformación, materializada en la infraestructura física (represas, túneles de trasvase) y en la burocratización estatal que politiza el ciclo hidrológico; y c) la salida o distribución final, orientada tradicionalmente a sostener la acumulación, seguridad y crecimiento de las metrópolis (Cochabamba y La Paz), pero que hoy se encuentra tensionada por la exigencia de compensaciones locales.

Bajo este lente, la infraestructura hídrica conforma redes que extraen valor ecosistémico de las periferias. Como advierte Henri Lefebvre (1974/2013), la producción del espacio es siempre un acto político; así, este metabolismo visibiliza la contradicción histórica entre la seguridad urbana y la vulnerabilidad rural (Hines, 2024). En segundo lugar, se operacionaliza el concepto de agencia política campesina, tomando distancia de la concepción tradicional de los movimientos sociales institucionalizados. Siguiendo los parámetros de las “sociedades en movimiento” (Zibechi, 2006), la agencia se entiende aquí no como una representación formal, sino como la capacidad colectiva, territorializada y de acción directa de los ayllus y sindicatos agrarios para subvertir las asimetrías de poder desde la movilización de sus lazos comunitarios cotidianos. Es imperativo diferenciar esta agencia de la gobernanza. Mientras la gobernanza hace referencia a marcos administrativos, normativos y procedimentales institucionalizados o pactados desde el Estado, la agencia política representa la fuerza socio-territorial desde abajo que desborda, presiona y obliga a replantear dichos marcos normativos. En el contexto de estudio, esta agencia ha evolucionado desde una mera resistencia reactiva (defensiva frente al despojo) hacia una soberanía de la infraestructura, donde las comunidades se apropian material y burocráticamente de los nodos técnicos críticos.

Finalmente, el análisis se enmarca en las teorías de gobernanza híbrida y la gestión de los bienes comunes (Ostrom, 1990). A diferencia de los enfoques institucionalistas clásicos que presuponen acuerdos racionales y

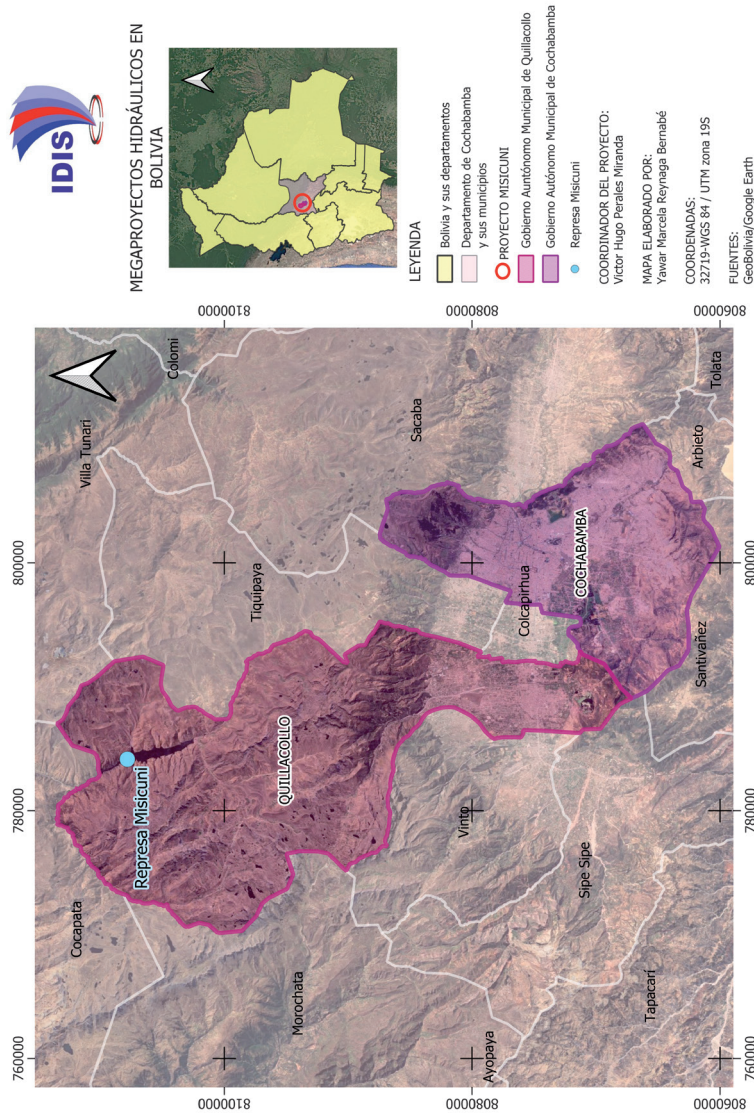
pacíficos, se incorpora la noción de conocimientos contestados (Boelens et al., 2019). Esto permite explicar que el cogobierno hídrico en Bolivia no es producto de una concesión del Estado, sino el resultado de un régimen de interdependencia forzosa. Ante el peso ineludible de la agencia política comunal, el Estado tecnocrático se ve obligado a entablar una diplomacia intercultural constante, en la cual la institucionalidad burocrática convive inexorablemente con la acción directa local (como el control físico de válvulas y la condicionante del consentimiento previo) para garantizar el funcionamiento del metabolismo social.

METODOLOGÍA

Para abordar la complejidad de la gestión del agua y la evolución de la agencia política en comunidades rurales, esta investigación adoptó un diseño cualitativo de corte histórico-sociológico e inmersivo. El estudio se estructuró bajo una perspectiva longitudinal que abarca desde la década de 1940 —marcada por el régimen de hacienda y los primeros levantamientos sindicales— hasta el año 2025, momento en que se consolidan las disputas por el cogobierno hídrico en el Estado Plurinacional. Se utilizó un enfoque de casos múltiples y comparados (Yin, 2014), seleccionando dos escenarios paradigmáticos pero contrastantes de la geografía boliviana: el Proyecto Múltiple Misicuni en los valles de Cochabamba y el Programa Multipropósito Batallas-Pucarani-El Alto en el altiplano de La Paz (específicamente en las localidades de Palcoco, Alto Peñas y Suriquiña).

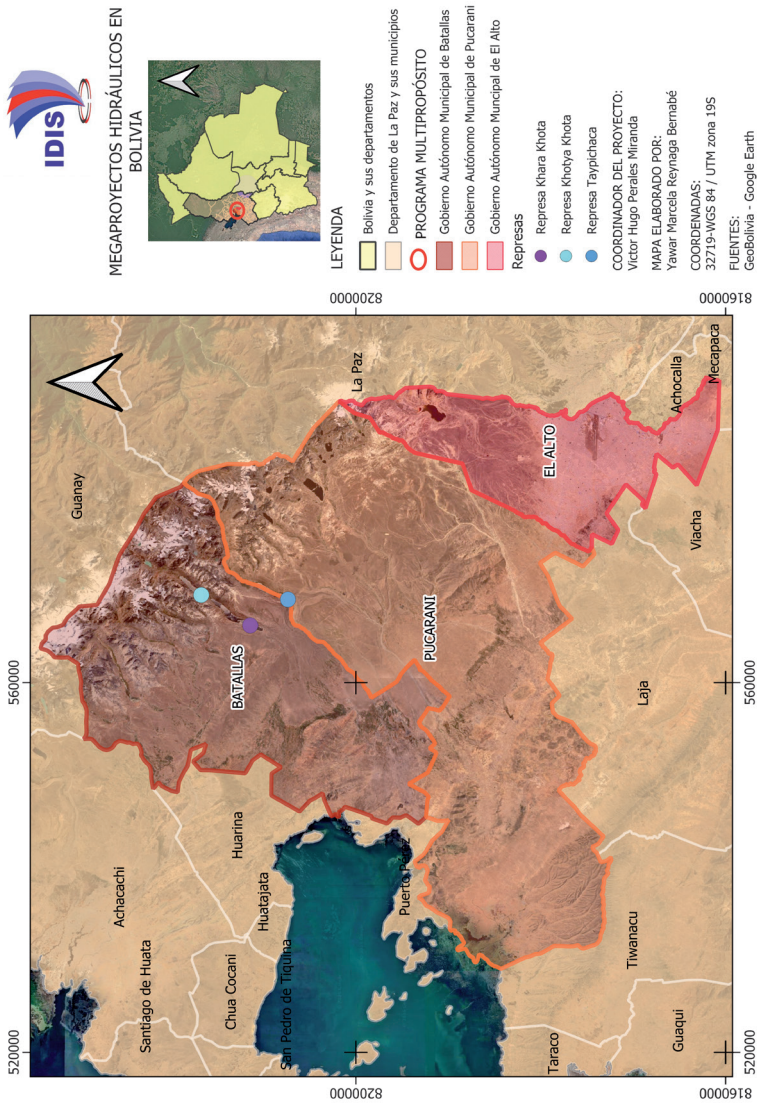
El enfoque epistemológico se distanció de las visiones puramente tecnocráticas de la ingeniería civil, asumiendo, en cambio, que la infraestructura hídrica es una materialización de las relaciones de poder (Swynedouw, 2004). En este sentido, se priorizó la investigación transdisciplinar para recuperar las voces, memorias y lógicas organizativas de las bases campesinas, superando la visión del Estado como único planificador racional del territorio.

Figura 1. Mapa satelital del Proyecto Misisuni



Fuente: Mapa satelital elaborado por Marcela Yawar Reynaga Bernabé.

Figura 2. Mapa satelital del Proyecto Multipropósito de Batallas y Pucarani



Fuente: Mapa satelital elaborado por Marcela Yawar Reynaga Bernabé.

La investigación, desarrollada primordialmente en el año de 2025, aunque con un trabajo exploratorio en el año 2024, trianguló dos técnicas principales de recolección de datos: el análisis documental histórico y el trabajo de campo etnográfico. En primer lugar, se realizó un análisis documental cronológico: Se realizó un vaciado exhaustivo de archivos históricos, normativas estatales e informes técnicos. Se analizaron documentos primarios fundamentales como el Decreto Supremo del 4 de julio de 1942 (que privatizó el Tuni Condoriri), tesis y los Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) de municipios como Batallas (Gobierno Autónomo Municipal de Batallas, 2016). Asimismo, se revisaron los estudios de prefactibilidad y factibilidad histórica de Misicuni (1953, 1957, 1975) documentados por Hines (2018) y los Cuadernos de Investigación del CIPCA sobre el origen del sindicalismo campesino (Iriarte, 1980). Trabajo de campo e inmersión territorial: Durante los años 2024 y 2025, se llevó a cabo un trabajo de campo cualitativo para documentar lo que ocurre en las zonas de impacto directo de los megaproyectos (Perales Miranda, 2025a). Se aplicó la técnica de *observación estructurada* en la infraestructura crítica, visitando *in situ* las represa de Taypichaca.

En segundo lugar, se realizaron entrevistas semiestructuradas a actores clave posicionados en distintas esferas del metabolismo hídrico. Entre los informantes se incluyó a expertos en temas hidrosociales, ingenieros y técnicos de las empresas estatales (Empresa Misicuni y especialistas de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua –EMAGUA– y de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento –EPSAS–), así como a líderes orgánicos de las comunidades afectadas. Destacan los testimonios de dirigentes agrarios locales, comunarias de base y representantes de Comités de Agua, quienes brindaron la perspectiva desde abajo sobre las obras de aducción y los procesos de negociación y compensación (Perales Miranda, 2025a).

Desde el punto de vista de las consideraciones éticas, el relacionamiento con las comunidades indígenas y campesinas se rigió por estrictos protocolos de ética en la investigación social. Se garantizó el principio de consentimiento informado antes de cada entrevista y recorrido territorial. Dada la alta conflictividad sociopolítica que envuelve la gestión del agua en Bolivia y la susceptibilidad frente a la intervención estatal o académica, se aplicaron criterios de confidencialidad para proteger identidades

específicas cuando los testimonios revelaban estrategias de presión política, vulnerabilidades locales o tensiones internas en los sindicatos agrarios.

La investigación de 2025 contó con la contribución de los auxiliares de investigación, universitario Marcelo René Jurado Chávez y la investigadora adscrita Yawar Reinaga Bernabé. Asimismo, hubo unos trabajos de investigación exploratorios en el año 2024 con los estudiantes de la materia Taller de investigación Social III del paralelo “A” del Tercer Año de la carrera de Sociología de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

RESULTADOS

1. Cronología comparada: del extractivismo tecnocrático al despertar organizativo (1940-1990)

El análisis de la evolución histórica de los megaproyectos hidráulicos en Bolivia revela que la relación entre el Estado, la infraestructura y las comunidades no ha sido lineal, sino que ha estado marcada por profundas asimetrías de poder. Para comprender el tránsito desde una dominación estatal excluyente hacia la contemporánea agencia política de las comunidades, es imperativo mapear los hitos que definieron el metabolismo hídrico del país.

La tabla 1 expone la cronología comparada de los casos de estudio (Misicuni en Cochabamba y el sistema hídrico andino en La Paz), evidenciando cómo las lógicas de exclusión territorial convivieron temporalmente con los primeros estallidos de resistencia campesina.

Tabla 1. Cronología comparada de la gestión hídrica y la agencia sociopolítica (1940-2025)

Década / Año	Proyecto Múltiple Misicuni (Valles-Cochabamba)	Sistema Multipropósito y Represas Andinas (Altiplano-La Paz)
1942		Decreto Supremo (4 de julio): Creación del “Parque Nacional” Tuni Condoriri. El Estado entrega el control territorial al Club Andino Boliviano, invisibilizando a las comunidades locales.
1944	Luis Calvo Soux propone desviar ríos hacia el valle central. Nace la idea de Misicuni como solución tecnocrática impulsada por élites urbanas.	
1946-1947		Levantamiento de Aygachi: Colonos organizan huelgas de brazos caídos contra el sistema de haciendas y el <i>pon-gueaje</i> . Inicio de la conciencia de clase campesina.
1953	Montreal Engineering evalúa Misicuni. Se consolida la opción hidroeléctrica y la internacionalización técnica del megaproyecto.	Reforma Agraria: Liquidación jurídica del latifundio. Las tierras de Peñas y Suriquiña retornan a los colonos. El Sindicato Campesino asume la administración local.
1957	Primer estudio integral de ingeniería. Misicuni adopta su carácter multipropósito (agua, riego, energía), consolidando el sesgo urbano.	

1975	Estudios de SOFRELEC priorizan los beneficios urbanos y agrícolas. Masiva caravana ciudadana cochabambina promueve la obra en terreno.	
1987	Electrowatt diseña el proyecto final. Creación de la Empresa Misicuni, institucionalizando la separación entre la gestión técnica y la deliberación social.	
1994		Ley de Participación Popular: Descentralización. Las comunidades (OTB) comienzan a planificar y exigir su propia infraestructura (microrriego y agua potable).
1998-2000	Convenios marco con comunidades altoandinas. Guerra del Agua (2000): Misicuni es resignificado por actores urbanos como símbolo de soberanía frente a la privatización.	
2004-2006		Quiebre del monopolio partidista. Asunción de Evo Morales (2006). Institucionalización del Estado Plurinacional y empoderamiento de sindicatos agrarios.
2005-2016	Conclusión del túnel de trasvase (2005). Conflictos socioambientales emergentes con comunarios relocalizados. Tensión territorial abierta.	Consolidación del control comunal sobre represas (Khara Khota, Taypichaca). Exigencia de obras de compensación e inicio de una “gobernanza híbrida”.

Fuente: Elaboración propia en base a Hines (2016, 2018, 2024), Iriarte (1980) y documentos técnicos del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas (2016).

2. La génesis de la desposesión: el Estado como agente de la élite y la invisibilización rural

Los datos históricos demuestran que, desde su origen, la infraestructura hídrica en Bolivia fue concebida como un instrumento de dominación territorial al servicio de las élites urbanas y agrarias. En la década de 1940, tanto en los valles como en el altiplano, el aparato estatal operó activamente para marginar a las poblaciones indígenas de la toma de decisiones sobre sus propios ecosistemas.

En el caso paceño, la exclusión se materializó mediante la figura de la conservación ambiental y el ocio metropolitano. El Decreto Supremo del 4 de julio de 1942 es la evidencia jurídica de esta política de despojo: bajo el argumento de proteger las bellezas naturales de la Cordillera de los Andes, el gobierno de Enrique Peñaranda declaró Parque Nacional al grupo andino que alberga el ecosistema del Tuní Condoriri y Huayna Potosí. El Estado otorgó atribuciones de policía rural a la Patrulla Andina del Club Andino Boliviano, prohibiendo la caza y regulando arbitrariamente la extracción de hielo y el tránsito de los ayllus locales. Esta medida instauró un extractivismo simbólico y territorial que supeditó el territorio ancestral a los intereses deportivos de la burguesía paceña, sin ningún proceso de consulta previa, reduciendo a los comunarios de zonas aledañas (como Alto Peñas o Palcoco) a la categoría de intrusos en su propia tierra. Esta violencia institucional corría paralela a la violencia física del sistema de haciendas, donde el *pongueaje* obligaba a los campesinos a prestar servicios gratuitos en La Paz (Poma Caba, 2020).

Simultáneamente, en Cochabamba, el despojo asumió un criterio de racionalidad tecnocrática. En 1944, el ingeniero Luis Calvo Soux propuso formalmente desviar las aguas de la cordillera del Tunari hacia el valle central, dando inicio al paradigma del proyecto Misicuni. Como documenta Hines (2018, 2024), este impulso no provino de una necesidad consensuada socialmente, sino de círculos cerrados de ingeniería y élites urbanas que veían en el trasvase la única solución para garantizar el crecimiento agroindustrial y el progreso de la ciudad. Durante esta fase fundacional, el diseño del proyecto sencillamente invisibilizó a las comunidades campesinas del municipio de Quillacollo que habitaban en las alturas de captación. El

problema del agua fue regulado bajo un lenguaje estrictamente técnico, suprimiendo su dimensión sociopolítica.

3. Burocratización del agua y consolidación del paradigma multipropósito

Entre las décadas de 1950 y 1980, mientras el proyecto Misicuni avanzaba en su internacionalización técnica, las áreas rurales paceñas comenzaban a fracturar el orden feudal, evidenciando ritmos distintos en la gestación de la agencia política.

En Cochabamba, la evaluación realizada por Montreal Engineering en 1953 y el estudio integral de Luis Calvo en 1957 cristalizaron el diseño de Misicuni como un megaproyecto multipropósito (agua potable, riego y energía hidroeléctrica). La intervención de firmas consultoras extranjeras (como SOFRELEC en 1975 y Electrowatt en 1987) cumplió la función de dotar de viabilidad y neutralidad técnica a una obra intrínsecamente política. La creación de la Empresa Misicuni en 1987 representó el clímax de esta visión: al institucionalizar la ejecución de la obra mediante una entidad corporativa autónoma, el Estado logró separar el plano técnico del político, consolidando un sesgo que subestimaba estructuralmente el conflicto social y restringía la deliberación de los usuarios campesinos (Hines, 2018). La infraestructura se imponía de arriba hacia abajo, naturalizando la extracción de recursos desde territorios de altura que, en ese momento, carecían de voz política audible.

4. El despertar de la agencia rural: huelgas, reforma agraria y sindicalismo

Contrastando radicalmente con la pasividad impuesta en las alturas de Misicuni durante la mitad del siglo XX, las comunidades altiplánicas adyacentes a la cordillera Real comenzaron a construir su agencia política de manera temprana y beligerante.

Las tensiones acumuladas por los abusos patronales en la provincia Los Andes detonaron en la segunda mitad de la década de 1940. El hito fundamental fue la articulación del Sindicato Agrario de Aygachi (1946-1947). Apoyados por corrientes obreras, los colonos organizaron históricas huelgas de brazos caídos, resistiéndose a cumplir el *pongueaje* e inaugurando un

modelo de insubordinación que se propagó velozmente hacia comunidades aledañas (Iriarte, 1980), principalmente en los territorios de los actuales municipios de Pucarani y Batallas. Esta agencia política incipiente —inicialmente estructurada como una resistencia frente a la explotación directa del cuerpo del campesino— sentó la matriz organizativa que permitiría materializar el poder sindical tras la Revolución Nacional.

La promulgación de la Reforma Agraria en 1953 significó el quiebre definitivo del régimen de hacienda. Las tierras fueron recuperadas por los colonos y, más importante aún para la posterior gestión comunitaria del agua, el sindicato campesino se erigió como la máxima autoridad legítima para la administración territorial (Iriarte, 1980). Si bien las grandes represas continuaban siendo diseñadas desde el Estado con una visión extractiva, las bases campesinas andinas ya contaban con la herramienta sociopolítica (el sindicato) que utilizarían décadas después para interpelar a las burocracias hidráulicas y exigir el control de sus recursos.

5. El giro del milenio: la guerra del Agua y la resignificación urbana de Misicuni

El ingreso al nuevo milenio marcó un punto de inflexión radical en la narrativa de los megaproyectos hidráulicos en Bolivia, evidenciando cómo la agencia política puede transformar la naturaleza misma de la infraestructura. En el caso del Proyecto Múltiple Misicuni, el catalizador de esta transformación fue la histórica guerra del Agua de Cochabamba en el año 2000. Hasta ese momento, el megaproyecto había avanzado bajo una lógica fragmentada e incremental, donde la perforación del túnel de trasvase (iniciada en 1996) generaba incertidumbres técnicas y expectativas urbanas, pero mantenía restringida la deliberación social.

La irrupción de las juntas vecinales, de los sindicatos agrarios y de las organizaciones sociales en contra de la privatización del agua alteró definitivamente el lenguaje público del proyecto (García Orellana et al., 2003). Como documentan diversos análisis históricos, durante este conflicto, Misicuni fue resignificado, es decir, dejó de ser percibido como una simple obra de ingeniería impuesta desde la tecnocracia estatal para convertirse en el emblema material del derecho al agua y la justicia distributiva. Esta apropiación social desbordó la narrativa empresarial que había

caracterizado a la Empresa Misicuni desde su creación en 1987 (Laurie y Marvin, 1999).

Resulta fundamental subrayar que esta resignificación se construyó, inicialmente, desde una perspectiva predominantemente urbana y de los valles bajos. La población de la ciudad de Cochabamba asumió el papel de impulsora del proyecto, integrándolo a su propia identidad regional como un mecanismo de resistencia frente a la centralización estatal de La Paz y a las políticas de hegemonía neoliberal de la década de 1990. En este escenario, la represa encarnó una profunda contradicción: por un lado, era promovida en los discursos oficiales como un motor de progreso y, por otro, era defendida por los actores locales como un baluarte contra la lógica de mercado. No obstante, este ímpetu urbano postergó temporalmente la visibilización de los conflictos que se estaban gestando en las alturas.

6. El surgimiento de la resistencia territorial en las zonas de captación

A medida que la materialidad de Misicuni avanzaba —con el cierre del túnel de trasvase en 2005 y la posterior adjudicación para la construcción de la represa en 2009— se hizo evidente el desfase estructural y territorial del megaproyecto. La consolidación del funcionamiento parcial del sistema de trasvase comenzó a aliviar los déficits de abastecimiento en la urbe cochabambina, pero simultáneamente desnudó los costos territoriales que debían asumir las comunidades de la cuenca alta.

A finales de la década de 1990 y con mayor fuerza en la década de los 2000, emergió la postura política de las comunidades situadas en la zona de extracción hídrica, específicamente en las alturas del municipio de Quillacollo. En contraposición al modernismo vernacular¹ urbano, las comunidades campesinas y los comunarios relocalizados comenzaron a articular

¹ Según la historiadora Sarah T. Hines (2024), el modernismo vernacular es la apropiación creativa y la adaptación de los paradigmas de desarrollo tecnológico por parte de la gente común, bajo sus propios términos. Hines propone este concepto en contraste directo con el alto modernismo o modernismo de Estado. Mientras que los megaproyectos del alto modernismo —como las grandes represas construidas por élites políticas, económicas y técnicas— se imponen desde arriba hacia abajo e ignoran la ecología, la historia y el conocimiento de las poblaciones locales, el modernismo vernacular aparece como una agencia desde abajo y democratización interclasista.

una resistencia basada en la exigencia de compensaciones, alertando sobre los riesgos geotécnicos, la alteración de sus accesos y el impacto directo sobre sus medios de vida.

Este proceso consolidó a Misicuni como un territorio hidrosocial en profunda tensión, visibilizando la disputa semántica y política entre el desarrollo ecológico urbano y el ecologismo de represa. Para el año 2016, a pesar del avance de las obras bajo el discurso gubernamental de seguridad hídrica y soberanía energética, las comunidades locales intensificaron sus demandas exigiendo nuevos convenios que contemplaran obras sociales y productivas. Así, la historia reciente de Misicuni demuestra que la legitimidad del megaproyecto fluctúa dependiendo de la sincronización o desalineación entre el Estado, la ingeniería y las sociedades locales, evidenciando entonces que la seguridad hídrica es, ante todo, una construcción política y territorial.

7. El altiplano paceño: de la Participación Popular a la consolidación del Estado Plurinacional

A diferencia del caso cochabambino, donde la defensa inicial del proyecto provino del centro urbano, en el altiplano de La Paz la agencia política en torno al agua se construyó directamente desde las bases agrarias en las zonas de captación. El sindicalismo campesino, que había dado sus primeros pasos con los levantamientos de Aygachi en la década de 1940 y se consolidó con la Reforma Agraria de 1953, encontró en las reformas de la década de 1990 un nuevo marco de oportunidad política.

La promulgación de la Ley de Participación Popular en 1994 fue un hito catalizador. Esta norma reconoció jurídicamente a las comunidades y ayllus como Organizaciones Territoriales de Base (OTB), descentralizando los recursos del Estado hacia los municipios rurales, como Batallas y Pucarani. Con este reconocimiento, los campesinos de localidades como Palcoco, Alto Peñas y Suriquiña adquirieron la facultad institucional de planificar y demandar directamente la ejecución de sus propios proyectos de infraestructura, particularmente sistemas de agua potable y microrriego, transformando la gestión pública a nivel local.

El empoderamiento se profundizó con las elecciones municipales de 2004, las cuales, al permitir la participación de Agrupaciones Ciudadanas

y Pueblos Indígenas, quebraron la hegemonía y el clientelismo de los partidos tradicionales, facilitando el ingreso de líderes indígenas orgánicos a las alcaldías locales. Finalmente, la asunción al poder de Evo Morales en 2006 y la posterior institucionalización del Estado Plurinacional significaron la cúspide de las luchas iniciadas a mediados del siglo XX. En este nuevo contexto, los sindicatos agrarios y las comunidades andinas han aprovechado el nuevo escenario político para dejar de ser sujetos subalternos y erigirse como actores de primer orden en el aparato estatal, exigiendo que los megaproyectos hidráulicos proyectados en sus territorios se rigieran bajo sus propios principios éticos y necesidades productivas.

8. Soberanía de la infraestructura y cogobierno hídrico: la agencia híbrida en acción

El resultado contemporáneo de este largo proceso organizativo es lo que el presente estudio conceptualiza como la consolidación de la soberanía de la infraestructura. La investigación empírica realizada demuestra que, en el área de influencia del Programa Multipropósito Batallas-Pucarani-El Alto, las dinámicas de poder se han invertido o, cuando menos, equilibrado. El impacto de grandes represas como Taypichaca, Khothia Khota y Khara Khota ya no es impuesto unidireccionalmente por el Estado metropolitano.

La represa de Khara Khota ilustra nítidamente esta transformación. Históricamente planificada dentro de una red de extractivismo para la metrópoli, hoy constituye la columna vertebral del sistema de aducción de agua potable que beneficia de manera directa a la comunidad de Suriquiña (hoy convertida en un cantón o distrito municipal) y a sus subcentrales (como Jichurasi, Payrumani y San Calixto). Gracias al empoderamiento sociopolítico, son las propias familias campesinas las que han asegurado el suministro de agua por gravedad para su consumo y producción agrícola.

Las comunidades de la región de Los Andes han forjado una agencia híbrida: combinan la movilización social clásica con un conocimiento técnico y burocrático avanzado. Actualmente, administran los sistemas de microrriego y conforman vigorosos Comités de Agua que poseen la autoridad material y política para decidir sobre el mantenimiento de la infraestructura, el control de las válvulas y la administración de los tanques.

Además, condicionan el avance de las macro-obras estatales a la ejecución estricta de obras de compensación para sus ayllus.

Este fenómeno consolida un escenario de *cogobierno hídrico*. Los campesinos han logrado imponer al Estado el reconocimiento de su derecho prioritario sobre el agua de las cordilleras, garantizando su soberanía alimentaria antes de ceder los excedentes hídricos hacia las lógicas de expansión urbana de La Paz y El Alto, aunque cabe precisar que este cogobierno no está exento de tensiones internas dentro de los propios sindicatos y comunidades frente a la gestión de esos recursos. De la sumisión bajo el *pongueaje* en las haciendas, estas comunidades han transitado hacia la autogestión de sus recursos territoriales e hídricos, demostrando que la infraestructura estatal solo es viable cuando se somete a la legitimación y el control de los habitantes originarios del territorio hídrico (Perales Miranda, 2025a).

DISCUSIÓN

1. Divergencias en la construcción de la agencia: identidad regional urbana vs. territorialidad agraria

Los resultados expuestos revelan que, si bien tanto el Proyecto Múltiple Misicuni como el Programa Multipropósito Batallas-Pucarani constituyen infraestructuras de envergadura destinadas a alterar el metabolismo hídrico regional, las trayectorias de politización y construcción de agencia en torno a ellos han sido diametralmente opuestas. Esta divergencia nos obliga a repensar las tesis clásicas de la ecología política que asumen una resistencia homogénea y rural frente a los megaproyectos (Boelens et al., 2019).

En el caso de Cochabamba, la defensa y el impulso del megaproyecto no nacieron en las zonas de captación, sino en el centro urbano y los valles bajos. Como documentan Laurie y Marvin (1999) y profundiza Hines (2018, 2024), Misicuni operó históricamente como un aglutinador de la identidad regional frente a la centralidad del Estado con sede en La Paz. La población urbana cochabambina abrazó un modernismo vernacular (Hines, 2024), defendiendo la presa como un derecho propio al desarrollo y a la autonomía. Durante la guerra del Agua en 2000, Misicuni fue el significativo vacío que articuló la resistencia contra la privatización de SEMAPA y las lógicas neoliberales. Sin embargo, esta apropiación simbólica

urbana tuvo un costo analítico y político: invisibilizó durante décadas el metabolismo extractivo que se imponía sobre las comunidades altoandinas de Quillacollo, cuyas demandas de reparación por despojo territorial recién lograron permear la agenda pública hacia finales de la década de 1990 y principios de los 2000 (Hines, 2016). En este contexto, la agencia política comunitaria surgió de manera *tardía y reactiva*, enfrentándose no solo al Estado, sino a la propia narrativa hegemónica regional que exigía el agua para la ciudad.

Por el contrario, en el altiplano paceño, la agencia política se construyó de manera concéntrica desde los territorios de captación hídrica hacia afuera. Las comunidades originarias de la provincia Los Andes no tenían una narrativa de modernidad que defender frente al Estado, puesto que el Estado mismo (a través del Decreto de 1942 sobre el Tuní Condoriri y la protección al gamonalismo) había sido el principal agente de su exclusión y servidumbre bajo el sistema de *pongueaje* (Poma Caba, 2020). Por tanto, la agencia comunitaria se cimentó en el fortalecimiento del sindicalismo agrario territorial. El tránsito orgánico desde los levantamientos de Aygachi en los años 40, pasando por la Reforma Agraria de 1953, hasta llegar a la institucionalización de las OTB en 1994, dotó a los campesinos paceños de una musculatura política y una estructura de mando (sindicatos y ayllus) capaz de interpelar a las burocracias hidráulicas antes y durante la ejecución de las obras, no después (Iriarte, 1980; Perales Miranda, 2025a; Tacachira Quispe, 2013).

El resultado contemporáneo de este largo proceso organizativo es lo que el presente estudio conceptualiza como la consolidación de la soberanía de la infraestructura. La investigación empírica demuestra que, en el área de influencia del Programa Multipropósito Batallas-Pucarani-El Alto, las dinámicas de poder se han equilibrado mediante una apropiación técnica de lo que antes era dominio exclusivo del Estado.

El impacto de las represas como Taypichaca, Khothia Khota y Khara Khota ya no es aceptado de manera unidireccional. Por el contrario, los testimonios recogidos en el trabajo de campo revelan que el control físico de la obra es la base de la negociación política. Como señala una comuna-ria de Alto Peñas:

Nosotros somos los dueños del agua, no es que el Estado venga y mande. Si no hay agua para nuestro riego en Alto Peñas, no sale agua para la ciudad. La llave de la represa nosotros la tenemos y el sindicato decide (B. L., comunicación personal, 20 de mayo de 2025).

Esta declaración evidencia que la infraestructura ha dejado de ser un objeto técnico inerte para convertirse en un dispositivo de poder comunal. La represa de Khara Khota ilustra esta transformación: concebida originalmente para la metrópoli, hoy es gestionada bajo una lógica de prioridad local donde las subcentrales de Jichurasi, Payrumani y San Calixto aseguran primero su suministro por gravedad.

Esta agencia híbrida combina la movilización social con un conocimiento burocrático avanzado. Las comunidades, así, ya no solo bloquean caminos; ahora auditan la ingeniería del Estado. Al respecto, un técnico enfatiza la capacidad de presión técnica, al replicar lo manifestado por los comunarios:

Lo comunarios decían: antes nos traían cualquier proyecto y aceptábamos. Ahora no. Ahora revisamos los planos del Multipropósito con nuestros propios ojos. Si el convenio decía invernaderos y no están, nosotros paramos la obra. El técnico de EMAGUA ya sabe que aquí mandan las bases (R. Q., comunicación personal, 12 de junio de 2025).

Desde la perspectiva estatal, esta realidad ha forzado un cambio de paradigma. Los técnicos e ingenieros reconocen que la viabilidad de la infraestructura depende de una negociación constante que escapa a los manuales de ingeniería civil. Como señaló un técnico social involucrado en la gestión hídrica, admite la fragilidad de la autoridad estatal frente al control territorial:

Trabajar en el Multipropósito es 50% ingeniería y 50% diplomacia social. No puedes mover una piedra sin el consentimiento de Palcoco o Suriquiña. Si la comunidad siente que su bofedal está en riesgo, te cierran la válvula y El Alto se queda seco en horas. La gestión técnica hoy es rehén de la paz social con los sindicatos (A. P., comunicación personal, 8 de octubre de 2024).

Este escenario consolida lo que definimos como un cogobierno hídrico. Aquí los campesinos han impuesto al Estado el reconocimiento de su

derecho prioritario, garantizando su soberanía alimentaria antes de ceder excedentes hacia las lógicas de expansión urbana de La Paz y El Alto. De la sumisión bajo el pongueaje en las haciendas, estas comunidades han transitado hacia la autogestión de sus recursos hídricos, demostrando que, en la Bolivia contemporánea, en algunos casos como los aquí estudiados, la infraestructura estatal solo es legítima cuando se somete al control y la fiscalización de los habitantes originarios del territorio.

En este sentido, la originalidad analítica del presente estudio reside precisamente en evidenciar cómo estos dos modelos divergentes de presión política determinan el nivel de dominio sobre la infraestructura. Mientras que en el caso Misicuni la participación comunitaria fue estructuralmente reactiva –ingresando al debate público de forma tardía para exigir compensaciones frente a un diseño hegemónico ya consolidado y avalado por la identidad urbana–, en el altiplano paceño el proceso fue diametralmente opuesto. En la provincia Los Andes, el control territorial previo e histórico, gestado orgánicamente desde las luchas sindicales y el fortalecimiento de los ayllus, funcionó como el cimiento indispensable para alcanzar una posterior apropiación técnica. Al poseer el dominio político y organizativo del espacio hídrico antes de la llegada de las macro-obras, las bases campesinas no se limitaron a resistir pasivamente, sino que lograron auditar, intervenir y subordinar el diseño de la ingeniería estatal a sus propias necesidades locales de microrriego y soberanía alimentaria.

2. El metabolismo social y las contradicciones del Estado Plurinacional

La comparativa de ambos casos ilumina las profundas tensiones constitutivas del Estado Plurinacional de Bolivia a partir del año 2006. El gobierno de Evo Morales y la posterior institucionalización plurinacional armonizaron en su discurso la reivindicación de los derechos indígenas (incluyendo la consulta previa, libre e informada) con la necesidad de ejecutar grandes obras de infraestructura bajo la premisa de la soberanía estatal y la seguridad hídrica (Perales Miranda, 2025a).

No obstante, el análisis a través del lente del *metabolismo social* demuestra que la materialidad de la infraestructura impone lógicas insoslayables. Megaproyectos como Misicuni o el Multipropósito paceño requieren

inexorablemente la extracción masiva de volúmenes de agua de ecosistemas rurales para sostener a metrópolis en constante expansión (Cochabamba y La Paz). Esta dinámica configura un neo-extractivismo urbano que choca frontalmente con la plurinacionalidad territorial. El Estado se encuentra atrapado en una paradoja estructural: necesita despojar hídricamente a sus propias bases sociopolíticas (comunidades y sindicatos agrarios) para satisfacer el derecho al agua de sus bases urbano-populares (juntas vecinales).

En este escenario, el lenguaje técnico de la ingeniería civil (estudios de factibilidad, caudales ecológicos, aducciones) funciona como un dispositivo de poder para intentar despolitizar el conflicto. Sin embargo, como se evidencia en la presión ejercida por los comunarios de Suriquiña, Palcoco y Alto Peñas (Plata Apaza, 2017), las bases han aprendido a leer como el Estado y a utilizar esos mismos códigos técnicos para exigir obras de compensación, tanques de almacenamiento y sistemas de microrriego que garanticen primero su soberanía alimentaria local.

Es fundamental advertir que la crítica al metabolismo extractivo de los megaproyectos no equivale a deslegitimar la acuciante necesidad de agua en urbes como El Alto. Con más de 885 mil habitantes según el censo del 2024 y déficits estructurales en la mayoría de sus distritos (Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, 2022), el acceso al agua allí es un imperativo de supervivencia. Al respecto, Perales Miranda (en prensa) sostiene que esta tensión no debe simplificarse como un choque entre antagonistas irreconciliables, puesto que las prácticas de multilocalidad (Perales Miranda, 2022; Perales Miranda, 2025b; Perales Miranda et al., 2021) evidencian vínculos familiares e identitarios vigentes entre los habitantes urbanos y las áreas altoandinas. En consecuencia, el horizonte sociopolítico debe trascender el binarismo campo-ciudad, buscando un modelo que atienda las vulnerabilidades metropolitanas sin sacrificar las fuentes de vida de las comunidades.

3. De la resistencia pasiva a la gobernanza híbrida y la interdependencia forzosa

A nivel teórico, los hallazgos de esta investigación obligan a superar el binarismo analítico que divide el escenario hídrico entre un Estado impositor omnipotente y una comunidad puramente resistente y victimizada. Lo que se ha consolidado en Bolivia no es la tragedia de los comunes ni el triunfo

del Leviatán, sino un sistema de gobernanza híbrida caracterizado por una *interdependencia forzada* (Boelens et al., 2019; Perales Miranda, 2025a).

La evolución temporal expuesta en los Resultados confirma que hemos pasado de un modelo de “dominación directa” (donde el gamonal administraba el territorio y los cuerpos mediante la fuerza) a un modelo donde la infraestructura crítica actúa como mediadora de las relaciones sociales. Las comunidades paceñas han desarrollado lo que denominamos una soberanía de la infraestructura: han comprendido que quien controla físicamente las válvulas, las compuertas de las represas (como Khara Khota o Taypichaca) y los pasos de quebrada, controla políticamente el metabolismo de la ciudad metropolitana.

Este empoderamiento trasciende la mera resistencia al estilo de las sociedades en movimiento descritas por Zibechi (2006) y se adentra en el terreno del cogobierno hídrico (Perales Miranda, 2025a). Las comunidades ya no se limitan a marchar o bloquear caminos para frenar un proyecto; en su lugar, auditan los diseños de ingeniería, exigen certificaciones técnicas (como se observa en los requerimientos de invernaderos en Jichurasi) y administran los comités locales de agua en paralelo a las Empresas Estatales (EMAGUA o EPSAS).

En síntesis, la seguridad hídrica urbana en la Bolivia contemporánea depende de una diplomacia intercultural incesante. El Estado posee el capital financiero y el diseño macro-técnico, pero las comunidades poseen el control territorial de las fuentes y la legitimidad política para paralizar o viabilizar la infraestructura. Esta agencia política híbrida demuestra que los megaproyectos no son resoluciones definitivas a la escasez, sino campos de batalla institucionalizados donde el ciclo hidrológico es repolitizado y negociado día a día.

CONCLUSIONES

A lo largo del presente artículo, se ha evidenciado que la planificación, construcción y operación de la infraestructura hidráulica de gran escala en Bolivia trasciende ampliamente el campo de la ingeniería civil para instituirse como un escenario de constante disputa y reconfiguración del poder territorial. El análisis comparativo e histórico de los megaproyectos Misicuni (Cochabamba) y el Programa Multipropósito Batallas-Pucarani-El Alto

(La Paz) demuestra que la agencia política de las comunidades rurales no es una cualidad inherente ni inmutable, sino el resultado de una profunda construcción dialéctica forjada en respuesta a las lógicas extractivas del Estado y el capital urbano.

Las poblaciones altoandinas han transitado un arduo camino desde la sumisión impuesta por el sistema latifundista –donde el Estado fungía como protector de las élites agrarias y urbanas, como lo demuestra el Decreto Supremo de 1942 sobre el Tuni Condoriri– hacia un despertar organizativo cimentado en las luchas sindicales iniciadas en la década de 1940. Este recorrido histórico demuestra que el empoderamiento campesino mutó de una resistencia inicial de carácter pasivo y defensivo (orientada a quebrar el *pongueaje* y recuperar la tierra) hacia lo que hoy se materializa como una verdadera soberanía de la infraestructura.

Las diferencias regionales enriquecen este análisis. Mientras que en Cochabamba la represa de Misicuni operó inicialmente como un artefacto aglutinador de la identidad regional urbana (un modernismo vernacular que postergó las demandas de las comunidades de captación hasta entrado el siglo XXI), en el altiplano paceño la politización del ciclo hidrológico se construyó concéntricamente desde el territorio mismo. Las bases agrarias de Palcoco, Alto Peñas y Suriquiña aprovecharon las coyunturas institucionales (Reforma Agraria, Participación Popular, Estado Plurinacional) para consolidar sus sindicatos y Comités de Agua como actores ineludibles en la administración del metabolismo social.

El neo-extractivismo urbano, promovido bajo el paraguas discursivo del Estado Plurinacional para asegurar el abastecimiento metropolitano, ha encontrado su límite en esta nueva agencia comunitaria. Las comunidades ya no solo protestan; auditan, exigen compensaciones productivas (sistemas de microrriego, invernaderos) y administran componentes críticos como las aducciones y represas locales (Khara Khota, Taypichaca). En consecuencia, se concluye que en la Bolivia contemporánea no existe ni un dominio absoluto de la tecnocracia estatal ni una autogestión comunitaria aislada, sino un régimen de gobernanza híbrida cimentado en una interdependencia forzosa.

Para garantizar la viabilidad a largo plazo de cualquier megaproyecto, la ingeniería hidráulica boliviana requiere abandonar su sesgo puramente

tecnocrático y asumir la necesidad de una *diplomacia intercultural* constante. Cada metro cúbico de agua que desciende desde las cumbres hacia las ciudades es el resultado material de un pacto sociopolítico renovado día tras día entre el Estado y el poder comunal.

REFERENCIAS

- Boelens, R., Shah, E. y Bruins, B. (2019). Contested Knowledges: Large Dams and Mega-Hydraulic Development [Conocimientos controvertidos: Grandes represas y desarrollo megahidráulico]. *Water*, 11(3), 416. <https://doi.org/10.3390/w11030416>
- García Orellana, A., García Yapur, F. y Quintón Herbas, L. (2003). “*La guerra del agua*”: abril de 2000, la crisis de la política en Bolivia. Fundación PIEB.
- Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. (2022). *Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien del Municipio de El Alto 2021-2025*.
- Gobierno Autónomo Municipal de Batallas. (2016). *Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016-2020*.
- Hines, S. T. (2016). ¿Desarrollo ecológico?: el proyecto Misicuni de Cochabamba, Bolivia, 1944-2016. *Decursos. Revista de Ciencias Sociales*, (32-33), 43-77.
- Hines, S. T. (2018). The Power and Ethics of Vernacular Modernism: The Misicuni Dam Project in Cochabamba, Bolivia, 1944–2017 [El poder y la ética del modernismo vernáculo: El proyecto de la represa Misicuni en Cochabamba, Bolivia, 1944–2017]. *Hispanic American Historical Review*, 98(2), 223-268. <https://doi.org/10.1215/00182168-4376680>
- Hines, S. T. (2024). *Agua para todos: comunidad, propiedad y revolución en la Bolivia Moderna*. Plural Editores.
- Iriarte, G. (1980). *Sindicalismo campesino: Ayer, hoy y mañana*. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado.
- Laurie, N. y Marvin, S. (1999). Globalisation, neoliberalism, and negotiated development in the Andes: Water projects and regional identity in Cochabamba, Bolivia [Globalización, neoliberalismo y desarrollo negociado en los Andes: Proyectos hídricos e identidad regional en Cochabamba, Bolivia]. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 31(8), 1401–1415. <https://doi.org/10.1068/a311401>

- Lefebvre, H. (2013). *La producción del espacio* (I. Gárate, trad.). Capitán Swing. (Obra original publicada en 1974)
- Linton, J. y Budds, J. (2014). The hydrosocial cycle: Defining and mobilizing a relational-dialectical approach to water [El ciclo hidrosocial: Definir y movilizar un enfoque relacional-dialéctico del agua]. *Geoforum*, 57, 170-180.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action* [Gobernar los bienes comunes: La evolución de las instituciones para la acción colectiva]. Cambridge University Press.
- Perales Miranda, V. H. (2022). Multilocalidad y riesgo climático. *Yati Amawt'a*, (8), 29-57.
- Perales Miranda, V. H. (2025a). *Megaproyectos hidráulicos en Bolivia: Un análisis desde la sociología ambiental y el metabolismo social* (Informe Final de Investigación). Instituto de Investigaciones Sociológicas “Mauricio Lefebvre”; Universidad Mayor de San Andrés.
- Perales Miranda, V. H. (2025b). Multilocalidad: expresiones del archipiélago vertical en la modernidad líquida en Bolivia. En N. Antequera Durán, F. Garcés Velásquez y K. Vivar Quiroz (eds.), *Migración, movilidad y multilocalidad en América Latina* (pp. 33-58). Abya-Yala.
<https://doi.org/10.17163/abyaups.155.2>
- Perales Miranda, V. H. (en prensa). Bofedales altoandinos: gobernanza y agencia comunitaria en el Altiplano boliviano. *Revista Kawsay Pacha*.
- Perales Miranda, V. H., Párraga, M. y Usnayo, J. (2021). Censo en Bolivia. Apuntes para la construcción de un indicador de multilocalidad. *Temas Sociales*, (49), 97-124. <https://doi.org/10.53287/ksgu9047xj87r>
- Plata Apaza, E. A. (2017). *Sistema de aducción de agua potable comunidad Suri-quiña (GAM-Batallas, Provincia Los Andes)* [Memoria laboral de Técnico Superior, Universidad Mayor de San Andrés].
- Poma Caba, E. (2020). *Rosa Isabel Agramonte Moraleda, cinco generaciones de terratenientes de descendencia mestiza, 1860-1969. Entre la acumulación, administración, inversión y el comercio* [Tesis de licenciatura, Universidad Mayor de San Andrés].
- Swyngedouw, E. (2004). *Social Power and the Urbanization of Water: Flows of Power* [Poder social y urbanización del agua: flujos de poder]. Oxford University Press.

- Tacachira Quispe, R. E. (2013). *La participación y control social en la gestión pública en el municipio de Batallas* [Proyecto de grado, Universidad Mayor de San Andrés].
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* [Investigación de estudios de caso: Diseño y métodos] (5ª ed.). Sage Publications.
- Zibechi, R. (2006). *Dispersar el poder: Los movimientos como poderes antiestatales*. Tinta Limón.